

La demanda social está postergada

¿Por qué el Gobierno no nacionaliza los hidrocarburos?

4 y 5

**Edición
especial**

- 3** ¿Qué ha cambiado desde el 2003?
- 6 y 7** Mujeres Alteñas: "No hemos acabado octubre"
- 8** La tragedia en Huanuni

LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

Hemos llegado a otro octubre y la demanda de recuperar los recursos naturales para Bolivia no se cumple. No se cumple en el caso de los hidrocarburos, de la minería, del agua y mucho menos en el de la tierra. Por ello, vuelve a resonar el pedido de nacionalización de una población que ha comprendido que sin el control total sobre sus recursos no puede pensar en menos pobreza y más desarrollo.

Muchos creyeron que el “octubre negro” era irreplicable en su dimensión violenta, sin embargo, este mes se viste otra vez de luto no por la agresión directa de las fuerzas represivas del Estado, sino por el enfrentamiento entre obreros de las minas, entre “hermanos de clase” o “hermanos de sangre” como lloraban las amas de casa en Huanuni.

Los caídos, que en vida padecieron los efectos de las políticas neoliberales: sin empleo, sin salarios dignos ni seguridad social, en suma, sin seguridad alguna para sus familias, vuelven a mostrar que los discursos y las reformas son insuficientes para revertir ese trágico destino de los obreros en el capitalismo.

El neoliberalismo, como un particular régimen de acumulación capitalista, es dirigido por las fracciones de la clase dominante que promueven el establecimiento de las condiciones más ventajosas para el ingreso de capital transnacional en la economía nacional. Este régimen de acumulación, que ha permitido enormes ganancias para los capitales transnacionales, ha generado un proceso acelerado de deslegitimación del propio Estado en el país.

De este modo, las luchas sociales por la recuperación de los recursos naturales, al apuntar al corazón de las políticas neoliberales, cuestionan el régimen de acumulación basado en el predominio del capital monopolista. En consecuencia, al enfrentarse al Estado y convertir esa lucha en lucha política, demandan la superación del propio carácter capitalista del Estado boliviano; es decir, se encaminan a sustituirlo por otro de naturaleza diferente.

La existencia del Gobierno del Movimiento Al Socialismo es un hito en la evolución de ese proceso; el apoyo

electoral brindado a Evo Morales es una expresión de la apuesta de las mayorías nacionales por profundos cambios. Sin embargo, una lectura más precisa demuestra que esta gestión gubernamental por su carácter reformista, que proviene de la contradicción entre la hegemonía del capital monopolista y la pretensión de un desarrollo independiente timoneado por los pequeños productores urbanos y rurales, se convierte en una vía para la reposición de la estabilidad política y la viabilidad económica de la acumulación capitalista, en la medida en que apuesta a establecer un capitalismo “sui géneris” en el que convivan pacífica y fraternalmente las grandes transnacionales con los desposeídos de siempre.

La comprensión de este proceso, en la perspectiva de orientarlo hacia cambios estructurales que superen el dominio económico y político de esas fracciones dominantes ligadas al capital monopolista, requiere un debate abierto y franco, en particular sobre la nacionalización de los recursos naturales. Con el dolor de los caídos, se trata pues de evitar otros octubres negros. ••



alerta laboral

Director
Carlos Arze Vargas

Edición general
Claudia Espinoza

Escriben
Osvaldo Guachalla, Pablo Poveda
Carlos Arze

Diseño y armado
Milton Iñiguez

Ilustraciones
Gonzalo Llanos

Fotografías
Indymedia, Gustavo Mujica,
CEDLA

Jaimes Freire 2940,
Tel. 241 2429, Fax. 241 4625
cedla@cedla.org / www.cedla.org

Los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La suscripción a “Alerta Laboral” puede realizarse gratuitamente en las oficinas del CEDLA.

Octubre de 2006

Con la movilización que comienza en Warisata y termina en una masacre en la ciudad de El Alto, empieza una nueva etapa en la política boliviana. Esa lucha tiene el indicador de acabar con el modelo neoliberal, por eso todos protestan contra el sistema calificándolo de injusto, porque sólo favorece a unos cuantos y deja en la miseria a una gran mayoría de la población.

LA AGENDA DE OCTUBRE

Cada día que pasa avanza el saqueo de nuestros recursos naturales y por esa necesidad nace la Agenda de Octubre que se convierte en una demanda. La visión principal es expulsar a las transnacionales, luchar contra las oligarquías, acabar con el sistema de partidos políticos que supuestamente nos representa, y, además, se crea un sentimiento antiimperialista. En tal medida y con las movilizaciones, cae el gobierno de Sánchez de Lozada y el gobierno de Carlos Mesa se compromete a cumplir dos puntos de la Agenda de Octubre: 1. Nacionalizar, industrializar nuestros hidrocarburos y no exportarlos a Chile; y 2. Juicio a Sánchez de Lozada por los crímenes cometidos.

Para ello, la FEJUVE El Alto prepara un proyecto de Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos con confiscación y expulsión de la transnacionales, que se constituye en un pliego petitorio donde está también el juicio de responsabilidades, la salida de Aguas del Illimani, empleos, tierra y otros, que es presentado al gobierno de Mesa, pero éste no escucha por su popularidad.

El mismo pliego se presenta a Santos Ramírez, diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de Diputados, pero tampoco escucha. Ante esta desatención, los movimientos sociales se articulan y realizan un gran Encuentro por la Nacionalización de los Hidrocarburos, que llega a concentrar delegados de todo el país y resuelve una primera movilización el 2 de mayo de 2005. En El Alto se da una toma simbólica de la planta de Senkata y en otros departamentos se movilizan, pero los parlamentarios, en esos días, aprueban la nueva Ley de Hidrocarburos que no nacionaliza nada. Las movilizaciones desembocan en un paro cívico indefinido que termina con la renuncia de Mesa.

EL TRIUNFO DEL MAS

El avance de las movilizaciones lleva al triunfo electoral del MAS, porque

Carlos Rojas Ch. es dirigente del Distrito 4 y fue ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto en la gestión 2004-2006. El 2003, combatió en las calles contra el Ejército. Desde su visión considera que el modelo neoliberal sigue igual, pero confía en que las bases y sus organizaciones se estén articulando y avanzando de nuevo.

TRES AÑOS DESPUÉS DE “OCTUBRE NEGRO”

¿Qué ha cambiado desde el 2003?

Carlos Rojas Ch.*

en su campaña promete, entre otras cosas, nunca más entregar nuestros recursos naturales a las petroleras.

Lo primero que hace Evo, al llegar a la presidencia, es ir a concertar con la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) de Santa Cruz, los empresarios privados y se separa de los sectores sociales; con las oligarquías pacta la Asamblea Constituyente a cambio de autonomías departamentales reviviendo a los partidos políticos tradicionales.

La FEJUVE plantea una propuesta para la elección de los constituyentes, pero no es escuchada. En el tema de los hidrocarburos, el Gobierno anuncia una nacionalización y el 82% de regalías para el Estado y 18% para las multinacionales, alegría mucho a la gente.

Sin embargo, ésta había sido una medida transitoria, según declaraciones del canciller David Choquehuanca, y existe la intención de vender gas a México a través de Chile, como dicen las publicaciones Energy Press, El Mundo y El Deber, pese a que El Alto y el pueblo boliviano carecen de gas a domicilio.

NO EXISTE COHERENCIA

Con la misma política, se entrega el Mutún a una empresa transnacional, por 40 años. Aguas del Illimani: hasta ahora no hay su salida. En empleos, el Gobierno supuestamente crea 114.400 con el Plane y Pro País, pero vemos cómo los desocupados hacen huelga de hambre en la Central Obrera Boliviana. En tierra, no hay revolución agraria porque no se confisca los grandes latifundios a los terratenientes.

Evo Morales dice “ni un muerto en mi Gobierno”, pero en Oruro el compañero de los sin techo muere por impacto de bala; en el Chapare, mueren dos cocaleros. No existe coherencia en el Gobierno. El 6 de agosto, el Presidente expresa que él es un corregidor y como tal ha resuelto el problema de los cooperativistas mi-

neros y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sin embargo, hemos visto la triste tragedia de muchos muertos y heridos.

Todos estos hechos nos dan la señal de que este Gobierno sigue administrando bajo este sistema, este modelo neoliberal, este colonialismo, porque no existen cambios ni indicios de cambios estructurales.

Por su camino, las organizaciones sociales, sectores movilizadores, las bases, están avanzando. Primero adquieren más conciencia y la visión de qué tipo de país y sociedad queremos, y la unidad en torno a la defensa de nuestros recursos naturales crece más. Será pues que nosotros mismos tengamos que atender nuestras demandas y que el poder esté definitivamente en los sectores marginados, explotados y oprimidos. El ascenso de los sectores sociales hará que de aquí para adelante nadie permita que la derecha suba de nuevo a conducir el Estado. ❖

* Dirigente del Distrito 4, ciudad de El Alto.



El 2 de mayo del 2005, los trabajadores tomaron simbólicamente las instalaciones de YPFB.

La migración de contratos, el control parcial de la cadena productiva y la refundación de YPF, no avanzaron de acuerdo al Decreto Supremo 28701 pese a sus limitados alcances. Eso significa que la “Agenda de Octubre” quedó en el tintero de la actual gestión gubernamental.

El pueblo boliviano dio un fuerte respaldo para que Evo Morales asuma la presidencia, con la esperanza de que se cumpla la demanda de nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, para el Movimiento Al Socialismo (MAS) la nacionalización no significa expropiación. Su política resumida en el Decreto Supremo 28701, no responde a la exigencia de que el Estado asuma el control de la cadena de hidrocarburos para propiciar el desarrollo, generar empleo y superar la crisis.

En principio, dicho decreto es transitorio y tiene el propósito central de aplicar la Ley de Hidrocarburos 3058. Pero aún con esa limitación, porque la Ley no recupera la propiedad real de los hidrocarburos, su aplicación no avanza. ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno no puede cumplir ni siquiera su propia política?

MIGRACIÓN DE CONTRATOS

El decreto establece sanciones y presiones para obligar a las empresas a migrar a los contratos establecidos en la Ley 3058 (producción compartida, operaciones y asociación). Si en el período transitorio (del 1ro de mayo al 28 de octubre), las empresas no cambian sus contratos, no podrán seguir operando, y será YPF la que asuma el control de los campos.

Para refundar YPF, establece que los megacampos San Alberto y San Antonio (60%

de la producción nacional), que son operados por Petrobras, paguen durante los 180 días del período transitorio una participación adicional de 32% a lo establecido en la Ley (50%), lo que resulta 82%.

Según el documento, la migración de contratos debería hacerse previa auditoría que determine las inversiones realizadas por las empresas para establecer la retribución o participación definitiva de las empresas en la producción.

Al momento, ninguna petrolera transnacional migró a nuevos contratos, peor aún, se opusieron a migrar a Contratos de Operación (Servicios). Petrobras dijo tácitamente que “la estrategia de la compañía es la de ser una empresa productora de crudo y no una prestadora de servicios”¹.

Además, el Gobierno para “no entorpecer” las negociaciones decidió no revelar el modelo de contrato en cuestión y el desenlace de las negociaciones con las petroleras, tal como sucedió con la suscripción de contratos de riesgo compartido en el gobierno de Sánchez de Lozada.

A estas alturas, las auditorías a los campos hidrocarburíferos que debieran ser usadas para negociar los nuevos contratos, no concluyeron, sólo existen resultados parciales. En este punto, el Comité Cívico de Camiri² denunció que las empresas auditoras son empresas subcontratistas

La demanda social está post

¿Por qué el los hidroca

de las petroleras, lo que pondría en duda la transparencia de esa información.

CONTROL DE LA CADENA

Con el fin de dar el aire “nacionalizador” a las medidas, el decreto ordena que en beneficio de YPF se transfiera el 48% de las acciones de las empresas capitalizadas Chaco y Andina que están en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Además, ordena la compra del 2% de las acciones de las empresas socias de las capitalizadas para llegar a tener el 50% más una acción, que le permita a YPF tener el control de estas empresas. Esta medida le permitiría tener el 6% de las reservas de gas y petróleo, ya que Chaco y Andina cuentan sólo con el 12% de las reservas, quedando el 88% restante en manos de las empresas transnacionales Petrobras, Repsol y Total.

Bajo la misma modalidad, establece la recuperación y compra de acciones de la empresa capitalizada de transporte (Transredes), en la que el 34% era administrada por las AFP a favor de los bolivianos beneficiados con la

PRESIONES EXTERNAS: EL PODER DE LAS PETROLERAS

La nacionalización de los hidrocarburos ha creado varios significados, por lo que el Gobierno no plantea la expropiación y considera que el cumplimiento de la “Agenda de Octubre” se basa sólo en aumentar los ingresos para el Estado y participar en el negocio a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Por ello, señaló, en varias ocasiones, que se requiere la “revisión y ajuste de la normatividad vigente en el sector hidrocarburos”.

Con esa visión, las autoridades tratan de ganar posiciones en la negociación con las petroleras respetando los marcos jurídicos establecidos por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en una posición ingenua e idealista, ya que la privatización fue diseñada para beneficiar a las empresas petroleras despojando a YPF de todo su patrimonio.

Por su parte, en el actual régimen económico, las empresas petroleras buscan negocios lucrativos mientras la intención gubernamental busca “socios”, en condiciones en las que el Estado no cuenta con recursos para competir, no es dueño de las reservas, ni del proceso productivo.

Detrás de este escenario de disputa por los recursos, se encuentra el poder de las petroleras, de sus gobiernos y de los organismos internacionales, que diplomáticamente dicen respetar las decisiones del Gobierno actual, pero, al mismo tiempo, no están dispuestas a ceder espacios.

Ante la posibilidad de que YPF se haga cargo de la comercialización de los hidrocarburos, una vez que éstos salgan de los campos petroleros y de las refinerías, las empresas han señalado que “su estrategia no es de prestar servicios”. Pero además exigen la fijación de precios internacionales para el mercado interno boliviano, que se les aseguren sus ganancias y el derecho de inscribir las reservas como suyas en el mercado internacional.

Para ello ejercen una serie de presiones, como el desabastecimiento de combustibles debido a la falta de inversiones, argumentando la incertidumbre de un panorama que no es claro para sus negocios. También amenazan con llevar a Bolivia a juicios internacionales “porque es un país que por libre y espontánea voluntad ha firmado tratados de protección recíproca a las inversiones” o exigen una “compensación

adecuada a las inversiones”, en caso de aplicarse alguna reforma en el sector.

Acompañan en esta presión los países de origen de las empresas. Cuando el Gobierno lanzó el decreto “nacionalizador” 28701, el primero de mayo, Evo Morales tuvo que viajar a España y Francia para explicar que sus medidas no eran confiscatorias y que en realidad quiere ser socio de las petroleras. Lo mismo sucedió cuando el ex Ministro de Hidrocarburos quiso operativizar dicho decreto. Bastó una llamada desde Brasil, del “hermano mayor”, para dejar sin efecto la resolución de Andrés Solíz Rada.

El gran blindaje de las empresas para garantizar sus negocios está enraizado en el sometimiento de la política macroeconómica a las decisiones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que —según el Gobierno— es lo único que ha funcionado durante estas dos décadas de aplicación del modelo neoliberal. Para el BM esta es la “fórmula correcta del desarrollo” y para que sus efectos sean plenos se debe dar “seguridad jurídica” a la inversión privada en los sectores que producen materias primas.

ergada

Gobierno no nacionaliza hidrocarburos?



Las marchas de los sectores sociales fueron una medida de presión en octubre de 2003, mayo y junio de 2005.

No se cumplió con la refundación de YPF, el Gobierno reconoció que fue un "flagrante error" el haber puesto un plazo. Lo que se conoce es que se plantea eliminar YPF para crear una "corporación" estatal, a fin de que ésta asuma el control de las actividades hidrocarburíferas de la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, comercialización, refinación e industrialización, compitiendo de igual a igual con las empresas petroleras.

A ello se suma la Ley 3065 que autoriza a la Prefectura del Departamento de Tarija constituir sociedades públicas y/o mixtas, para llevar adelante emprendimientos empresariales con gas natural, y que fue ratificada por el Vicepresidente de la República, fragmenta la posibilidad de estructurar un YPF integral, generando pugnas entre regiones.

APARENTE CAMBIO DE TIMÓN

El ex ministro Andrés Solíz Rada, cuando estaba en funciones, lanzó la Resolución Ministerial 207/2006, aduciendo una interpretación consecuente del DS 28701. Este señala que el Estado es propietario de la producción de los hidrocarburos y que las empresas petroleras que operan en el país solamente prestan servicios.

Con esa resolución se intentó asumir el control de la comercialización de petróleo y GLP y derivados en el mercado interno y externo; también obligaba a las refinerías a convertirse en empresas de servicios marginando a Petrobras del negocio del refino.

La medida causó revuelo en Brasil y obligó al vicepresidente Alvaro García a trasladarse a ese país para explicar que la mencionada resolución fue un exceso del Ministro, quien después del hecho decidió renunciar al cargo.

El nuevo ministro, Carlos Villegas, suspendió temporalmente la resolución de Solíz hasta "que se consolide la situación económica de YPF". Villegas, calificado como "moderado" por las empresas, tiende a ser más flexible en la aplicación de las políticas oficiales tal como se constató en las negociaciones del Mutún, en las que participó. De hecho, decidió no hacer declaraciones públicas sobre las negociaciones con las petroleras. ❖

Ley de Capitalización. En el caso de las refinerías y el almacenaje de derivados —que fueron privatizados por Petrobrás y Oil Tanking GMP, respectivamente— se señala que se compren el 50% más una acción a dichas empresas.

El control de las refinerías, el almacenaje y el transporte podría permitir a YPF el suministro de hidrocarburos al mercado interno. Sin embargo, aún no se tiene el control del 50% más una acción de las empresas capitalizadas (Andina, Chaco y Transredes), de las refinerías privatizadas Petrobras Bolivia Refinación (EBR) ni de la empresa de almacenaje (CBLH).

Se transfirió en propiedad a YPF, a título gratuito, las acciones de los bolivianos que

formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las petroleras capitalizadas Chaco, Andina y Transredes representando el control del 48% de las acciones en los dos primeros casos y el 34% en el último. La compra de acciones de las empresas (capitalizadas y privatizadas) para alcanzar al 50% más una acción no ha presentado ningún resultado.

REFUNDACIÓN DE YPF

Para poder actuar efectivamente en las operaciones de la cadena, el decreto ordena la reestructuración integral de YPF, en el lapso de 60 días. Para ello, contaría con el 50% más una de las acciones de las empresas y los recursos provenientes del 32% de la participación adicional de los megacampes.

1 Declaración de Sergio Gabrielli a Associated Press citada por el semanario Energy Press N° 288 del 10 al 16 de abril de 2006.

2 Denuncia del Comité Cívico de Camiri ante el Primer Encuentro nacional sobre Nacionalización-Expropiación. Memoria publicada en el periódico quincenal Hora 25 N° 43 del 6 al 20 de octubre de 2006.

“Pensar que ha pasado tanto tiempo, es un poquito difícil hablar...”. Así empieza Celia, con la voz entrecortada, triste y la mirada baja ante los recuerdos que se amontonan desordenados.

Celia Salazar está junto a Nelly Orozco, Isabel Atencia y Victoria Quisbert. Cuatro mujeres con varios hijos, trabajadoras y luchadoras, quienes fundaron el Colectivo Mujeres Alteñas. Celia es de la zona 16 de Julio, Nelly de Ballivián, Isabel y Victoria vienen del sur, cerca de la planta de Senkata.

Por unas horas, las cuatro se detienen para hablar de las jornadas de octubre de 2003, aquellas tan dolorosas y tan llenas de experiencia y coraje. Pero el salto al presente es inevitable y las palabras comienzan a fluir.

“Como mujeres hemos sido constantes partícipes. Al principio, nos echaban la culpa porque habíamos empezado a trabajar el tema hidrocarburos antes de octubre y después veíamos la muerte tan de cerca de nosotros. El mismo 11 de octubre, cuando era Día de la Mujer, seguíamos haciendo mitines en la ciudad y en Ballivián”, apunta Celia. Para entonces, ya habían caído tres muertos y varios heridos en El Alto.

“Ha llegado otro octubre y parece que no ha cambiado nada. La gente ha pedido que se recupere todos los recursos naturales porque hemos entendido que esa es la solución para que ya no haya hambre en Bolivia. Pero parece que los únicos que sabemos eso somos nosotros, el Gobierno se olvida”, añade Isabel. “Creo que ahora habría que acabar esa lucha de octubre que ha quedado a medias y por eso también no estamos pudiendo lograr ese cambio que queremos, porque está la misma gente pintada de azul y blanco que antes era rosada, naranja...”.

Nelly, entonces, reflexiona: “El pueblo alteño ha derramado sangre para que otros se beneficien. Santa Cruz y Tarija se han beneficiado más, pese a que no se han movido. Ni los jóvenes que han luchado tanto han tenido más beneficios para su universidad (UPEA), más al contrario, los han llamado vándalos, terroristas. Hemos trabajado para que otros, como el actual Ministro de Aguas, se sirva de la población. Nos molesta eso”.

Además, prosigue, “las transnacionales siguen en Bolivia y no hemos podido expulsarlas como era

Elas cuentan que el futuro de sus hijos les ha motivado a organizarse como mujeres. No hay trabajo para ellas ni para sus familias, por eso han decidido salir a informar a la gente lo que ellas recibían como noticias. Era como recibir baldazos de agua fría, saber que “Goni” privatizó todos los recursos naturales y tantos otros temas. Descubrieron así que “la vida no había sido sólo cocinar y trabajar”.

DEL 2003 AL 2006

Colectivo Mujeres Alteñas: “No hemos acabado octubre”



En mayo y junio de 2005, las mujeres volvieron a protestar por la recuperación de los recursos naturales.

nuestro interés como mujeres. El Gobierno dice, como gran cosa, que percibe 600 millones de dólares por el gas, pero lo que ellas ganan, es mucho más. Y pese a que la nueva Ley de Hidrocarburos les sigue favoreciendo, no quieren someterse ni a eso. Por eso seguimos aquí en la lucha porque creemos que todas las transnacionales deben alejarse del país y no sólo las petroleras, sino las que manejan el agua, la electricidad, la minería, las telecomunicaciones...”.

En su opinión, el Gobierno no tiene capacidad para cambiar esas condiciones. “Debería pensar más en nuestra gente, pensar en quién lo ha puesto ahí. Tampoco nuestras organizaciones vivas están haciendo algo, no se pronuncian sobre nuestros hidrocarburos. El Gobierno está comprando conciencias,

llevándolos a trabajar y quizá por eso el pueblo está flaqueando, estamos perdiendo en esta situación”.

Para Victoria “la derecha somete a nuestro Presidente. Por eso hay que seguir con la lucha, con nuestros folletitos, como hemos empezado antes

“La gente ha pedido que se recupere todos los recursos naturales porque hemos entendido que esa es la solución para que ya no haya hambre en Bolivia.”

Isabel

Octubre de 2006

transmitiendo la información. Nosotras salíamos desde antes de octubre repartiéndolos volantes. Íbamos a las movilizaciones y ya decíamos que se vaya Goni”, recuerda con una media sonrisa.

VOLVER A LAS CALLES

Ninguna pensaba, en esos días, que la movilización iba a llegar a tanto. Isabel que estuvo lado a lado con Victoria, como dirigentas en el Distrito 2, anota que, al principio, la gente no respondía. “Éramos puras mujeres que poníamos piedritas en las avenidas y todavía algunos vecinos nos insultaban, decían que vayamos a lavar nuestros calzones...”. Persistieron hasta que apareció el primer tanque con militares armados queriendo pasar el bloqueo. “No nos hemos movido. ¡Ese abuso de poder nos ha dado un coraje...! Y fue esa violencia de disparar abusivamente, lo que ha despertado y enojado a mucha gente. El pueblo explotó”.

En el sector norte por Ballivián, cuenta Nelly, “la organización de la gente no dependía exclusivamente de la junta vecinal. Había necesidad de expresar nuestros sentimientos ante los muertos, los helicópteros, era algo desesperante, como recordar la dictadura. Muchos se han ido informando del porqué de esa violencia. Las paredes ya estaban pintadas ‘no a la venta del gas ni por Chile ni por Perú’ y de eso se hablaba en los mitines. Todos empezaron a pensar en el empleo, en los problemas de las familias y en que las transnacionales se llevaban todo”.

En este momento, Celia retoma la palabra y complementa: “Sí, pero cada minuto seguimos perdiendo con las transnacionales. Y creo que estamos peor, porque antes por lo menos se hablaba, se protestaba. Ahora cuando hablas te dicen que eres de Podemos, nos coartan. Tenemos nomás que volver a las calles, no podemos

COMO UN TEJIDO DE VARIOS COLORES

Los recuerdos de Celia, Nelly, Isabel y Victoria se tejen como retazos de varios colores. Sólo quienes han probado del pan colectivo pueden construir la memoria de una sola historia en el telar de la vida. Pueden zurcir una y otra vez cada pasaje con olor a sangre y transformarlo en esperanza.

Eran días, noches y amaneceres en la lucha. Las barricadas, las vigiliadas, las zanjas que la gente abría como hormigas, los alambres, los miguelitos fabricados que salían en saquillos, el agua acopiada para llevar a los marchistas en carretillas, las fogatas, las wawas y las ollas comunes.

Cuando querían sacar los carros cisternas, cortaban la luz esos enmascarados desconocidos. La gente gritaba y pedía auxilio. En la oscuridad, se escuchaba todo y todos corrían a acudir, sin miedo.

De a poco llegaban las noticias del otro lado, habían hecho caer las pasarelas y entonces,

aquí, se discutía cómo hacerlo. No había ni hambre ni sueño. Algunas tiendas abrían a las cuatro de la mañana, pero con los días ya no había plata para comprar. Además, las sardinas se habían acabado en todas partes.

Tampoco habían armas, sólo la voz, el grito. Se sentía rabia, impotencia. Tanta sangre derramada. Tantos jóvenes heridos. No había cansancio. A las siete de la mañana, ya era hora de marchar. El paso era uno solo, no podías ni mirar atrás, todos a un solo ritmo. Era mucha la furia. A una cholita de 18 años que iba adelante, le dispararon del helicóptero y ha muerto.

Cuanto más los dirigentes decían ocúltense, más la gente salía a las calles. La coca era como oro, ya no había, apenas unas hojitas daban fuerza. ¿Y esos muertos?, ¿qué hace el Gobierno ahora? Tantas esperanzas hemos puesto en el cambio. Duele recordar tanta sangre en vano. ¿Vamos a seguir mirando con paciencia? ¿Hasta cuándo? ❖

permitir que se enajenen nuestros recursos naturales. Nos hemos quedado adormecidos y es hora de exigir que se cumpla todo lo que hemos pedido. ¿Qué es lo que está haciendo el Presidente por eso?”, pregunta, a lo que Nelly aumenta: “Si el pueblo alteño ha luchado contra el Proyecto Pacific LNG, ¿por qué ahora el Gobierno quiere reactivar este proyecto? Cuando se estudiaba este tema, era sabido que Bolivia perdía muchos recursos, porque el país como exportador tenía que pagar el transporte y todo eso. Entonces, dejó esa pregunta al Gobierno”. ❖



Del campo a la ciudad, las mujeres fueron protagonistas en las decisiones y en la acción, de septiembre a octubre de 2003.

“las transnacionales siguen en Bolivia y no hemos podido expulsarlas como era nuestro interés como mujeres”.

Nelly

“Y creo que estamos peor, porque antes por lo menos se hablaba, se protestaba. Ahora cuando hablas te dicen que eres de Podemos”

Celia

“la derecha somete a nuestro Presidente”.

Victoria

El cruento enfrentamiento entre trabajadores asalariados de la empresa Huanuni y cooperativistas que trabajan en el mismo yacimiento, muestra la peligrosa dirección que está tomando el proceso político boliviano por causa de la crisis económica y de la inoperancia del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya orientación ideológica le impide asumir medidas reales de “nacionalización”.

CAUSAS DE FONDO

El neoliberalismo ocasionó la difusión inaudita de la miseria en vastos sectores del occidente del país que vivían de la explotación minera, especialmente en los departamentos de Oruro y Potosí, y también la quiebra de la agricultura campesina, generando masivas migraciones de jóvenes hacia los centros mineros¹. Con la liquidación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), se generó un incremento en la formación de cooperativas dedicadas a la explotación de yacimientos mineros. Los sucesivos gobiernos neoliberales aceptaron esta situación, pues veían una válvula de escape que atenúa conflictos sociales y que no cuestionaba la política privatizadora.

Pese a que el MAS prometió “refundar la COMIBOL como empresa estatal y actor principal en la actividad productiva del sector”, en su Plan Nacional de Desarrollo tal propuesta ‘nacionalizadora’ se diluyó frente a las promesas de “garantizar seguridad jurídica y un entorno nacional, social y político estable” para los capitales extranjeros, aprobar una Ley de Tratamiento y Fomento a la Inversión Extranjera y “generar circuitos virtuosos entre el Estado y las empresas transnacionales”². Así, la recuperación del centro minero de Huanuni —lograda por las movilizaciones de los mineros en el 2002— fue desconocida desde el gabinete del Gobierno “revolucionario”.

OBREROS CONTRA OBREROS

Lo más lamentable de la tragedia de Huanuni fue, sin duda, el enfrentamiento por el control del cerro Posokoni entre obreros asalariados y cooperativistas —ambos empujados por la miseria y el desempleo— con la ilusión de que el buen precio actual del estaño les cambie la vida. Los asalariados, reunidos en la emblemática Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), enarbolan la necesidad de una nueva “nacionalización” de la minería y la refundación de COMIBOL, que permitan el control del excedente por el Estado y la creación de empleos

La política privatizadora en el sector de la minería choca con la demanda de nacionalización y refundación de COMIBOL. La tensión es permanente en los centros mineros.

Sombríos días de socavón...

Huanuni: la trágica consecuencia del reformismo del MAS

permanentes, mientras que los principales dirigentes “cooperativistas” proclaman el derecho de explotar esos ricos yacimientos de manera privada, amparados en una supuesta compra de acciones de la quebrada empresa inglesa Allied Deals que se apoderó de Huanuni mediante una dolosa privatización en el gobierno Banzer-Quiroga.

Aunque los protagonistas centrales del violento enfrentamiento provienen, en gran parte, del mismo proletariado minero, la contradicción de los intereses que representan se explica por la presencia de un grupo de pequeños y medianos empresarios mimetizados bajo el denominativo de “trabajadores cooperativistas”. Dicho grupo ha surgido de la creciente división del trabajo en las cooperativas, que dio lugar a que muchos socios se transformen en patrones de miles de obreros llamados engañosamente “representantes”, “jornaleros” y “voluntarios”³.

Los patrones no están presentes en todas las cooperativas, debido a la amplia diversidad de las explotaciones por el tipo de mineral que explotan o por la tecnología que utilizan, pero en algunas contratan trabajo ajeno en cifras impresionantes⁴ y obtienen utilidades nada despreciables⁵, situación que parece confirmarse con la negociación de compra de acciones de Huanuni⁶.

DOS POLÍTICAS DE CLASE

En este episodio se enfrentan, entonces, dos políticas de clase diferentes. Por un lado, la demanda de los asalariados reivindica la propiedad social de los medios de producción; contrariamente, el objetivo de esa capa privilegiada de dirigentes “cooperativistas” coincide con la política oficialista que, pese al discurso altisonante de “nacionalización”, aspira a desarrollar la minería mediante la introducción de nuevos capitales extranjeros a través de “alianzas estratégicas”. Esa orientación de los dirigentes “cooperativistas” en torno a la reactivación de la minería, constituía la razón de su alianza con el Gobierno⁷.

De este modo, asistimos a un enfrentamiento entre trabajadores

producido por la ausencia de soluciones a sus problemas vitales por parte del Gobierno, que retrocede cada vez que sus radicales discursos provocan la molestia de las transnacionales y las oligarquías de oriente. No cabe duda que esta lucha intestina acaba favoreciendo a las transnacionales, que la alientan con la esperanza de que se siga encubriendo la identidad de los verdaderos responsables y se mantenga a los trabajadores alejados de toda acción dirigida contra sus intereses.❖

1 En 1995 existían 428 cooperativas, en el presente éstas llegan a 510. Las cooperativas empleaban 28.000 trabajadores en 1986, para fines de los noventa éstos sobrepasaban las 50.000 personas.
 2 “Plan Nacional de Desarrollo. Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para Vivir Bien”.
 3 Según Hevia, J.L. y Molina, R. (Estudio medio-ambiental de la minería mediana, pequeña y artesanal en Bolivia, IISEC, 1997), los representantes son “quienes hacen la labor del socio a cambio de una remuneración de entre un 20 a 30 % de la producción que le corresponde al socio a quien representa” y los voluntarios son los “que realizan diversas tareas sustituyendo a los socios; no se les paga en efectivo, sino que se les autoriza a trabajar un tiempo para su provecho”.
 4 De acuerdo a Loayza, F. y Franco, I. (Evaluación socioeconómica rápida de Chima Municipio de Tipuani, departamento de La Paz, IDRC, 2003) la cooperativa aurífera Molletero, perteneciente a 48 socios, emplea alrededor de 600 trabajadores, entre voluntarios y empleados.
 5 Según Hevia y Molina, op.cit., la diferencia entre el ingreso neto promedio de una cooperativa estamifera que usa trabajo manual y otra semi-mecanizada, puede ser del 57% por t.m.f.
 6 La Prensa de 13/09/06, informa que se habría ofrecido 1.500.000 dólares por la compra de acciones.
 7 En la actualidad varios proyectos mineros como San Bartolomé o Pulacayo avanzan sobre la base de contratos de asociación entre cooperativas y empresas extranjeras.

